

**-I- "TALANX INTERNATIONAL AG Y OTROS s/
APEL RESOL COMISIÓN NAC DEFENSA DE
LA COMPET"**

Buenos Aires, 10 de julio de 2012.

Y VISTO:

El recurso directo de apelación interpuesto en los términos del art. 53 de la ley 25.156 por Talanx International AG y los señores Antonio Tedin y Marcelo Fabiano a fs. 560/578 —que fue fundado en ese mismo acto y la contestación de traslado del Estado Nacional Ministerio de Economía de fs. 600/608—, contra la resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas n° 106 del 27.7.11 (cfr. fs. 548/558); y

CONSIDERANDO:

Los Dres. María Susana Najurieta y Martín Diego Farrell dijeron:

1.- La resolución de la Secretaría de Comercio Interior n° 106 del 27.7.11 emitió la opinión consultiva solicitada en el sentido de que la operación de compra venta celebrada —entre Talanx International AG y los señores Antonio Ramón Tedin y Marcelo Gustavo Fabiano— debe someterse al control previo y notificación establecida en el art. 8° de la ley 25.156.

2.- Los apelantes se agraviaron porque, sostienen, la Secretaría de Comercio Interior incurrió en un error al concluir que la operación de compra venta se encuentra sujeta al régimen de control de concentraciones dispuesto por el capítulo III de la ley 25.156. Afirmó que el error consistió en no tener en cuenta que el volumen de negocios de la operación no supera el umbral de \$200 millones que establece el art. 8° de la ley 25.156. Destacó también que Talanx no es titular de acciones ni activos en

ES COPIA

MARIA SOLEDAD JORGE
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

USO OFICIAL

la República Argentina, de manera tal que encuadra en una de las excepciones al régimen del art. 10, inc. c), de la ley 25.156. Solicitaron que se declare judicialmente que la operación está exenta del trámite de control de concentraciones económicas.

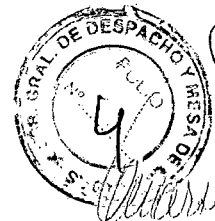
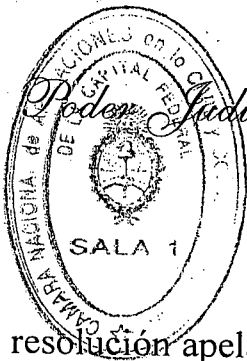
Respecto de la sociedad del grupo adquirente "Hannover" destacó que si bien realiza actividad económica en el país al prestar servicios de reaseguros —desde el extranjero y a favor de distintas compañías aseguradoras que operan en el mercado argentino—, lo cierto es que no posee activos y acciones en el país, que es la exigencia de la ley 25.156.

3.- De la manera en la cual han sido planteados los agravios, el Tribunal advierte que la cuestión a resolver consiste en determinar si la obligación de informar a la autoridad administrativa —en los términos del art. 8° de la ley 25.156— sobre la compra venta de una empresa argentina constituye o no una carga excesiva que violenta derechos y garantías constitucionales de las contratantes.

4.- En primer término, cabe recordar que las recurrentes optaron por solicitar que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emita una opinión consultiva a los fines de determinar si una operación se encuentra sujeta —o no— al control previo previsto en el art. 8° de la ley 25.156. Todo ello, de conformidad con lo establecido por el art. 8° del decreto n° 89/2001 y la resolución n° 26/06 de la Secretaría de Coordinación Técnica.

Tal como lo dispone la resolución n° 26/06 de la Secretaría de Coordinación Técnica, la opinión consultiva sólo decide y determina si la operación de concentración económica quedará sujeta al control previo establecido en el art. 8° de la ley 25.156.

De esta manera, se advierte que la opinión consultiva emitida en autos nada decide sobre la existencia, alcance y modalidad de los derechos de los recurrentes, sino que —por el contrario— la misma tiene por objeto despejar una situación inicialmente dudosa para las partes, como lo es si las contratantes se encuentran o no obligadas a presentar el informe del art. 8° de la ley 25.156.



MA. ALEJANDRA LAGOMARSINO
SECRETARIA

5.- En estas condiciones, el Tribunal no advierte que la resolución apelada provoque a las partes un gravamen irreparable al interés de las partes. En efecto, dilucidar una situación dudosa frente a la administración —tal el carácter de la opinión consultiva— no provoca un perjuicio o menoscabo a los derechos o intereses de las partes contratantes. Tampoco declara la existencia o la extinción de un derecho.

Por el contrario, la obligación establecida por el art. 8° de la ley 25.156 constituye una carga pública que toda persona debe soportar, como sacrificio sin reparación patrimonial, por el hecho de convivir en una comunidad jurídicamente organizada (cfr. Cam.Nac.Cont.Adm.Fed. Sala IV, causa 6617/97 del 3.8.00), sin que se haya alegado y demostrado que informar detalladamente a la administración sobre la compra venta de una importante empresa argentina exceda lo normalmente tolerable o perjudique de manera insalvable los derechos y garantías de las partes.

En rigor, el excesivo tiempo que demandaría el procedimiento del art. 8° de la ley 25.156 resulta, por el momento, conjetural, dado que el formulario de inicio del mismo no ha sido siquiera presentado.

6.- Finalmente, y ya en referencia a la crítica referida a que el volumen del negocio no supera el umbral de \$200 millones que establece el art. 8° de la ley 25.156 y que Talanx no es titular de acciones ni activos en la República Argentina —de manera tal que encuadra en una de las excepciones al régimen del art. 10, inc. c), de la ley 25.156—, cabe consignar que a criterio de este Tribunal no se demostró de manera concreta y fehaciente cuál es el volumen del negocio efectivamente involucrado en la operación y la inexistencia de titularidad de activos en el país por parte de la adquirente, dado que integra un grupo económico que se desempeña en nuestro país (cfr. punto 13 de fs. 553).

En función de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso directo de apelación interpuesto a fs. 560/578. Las costas se deben distribuir en el orden causado atendiendo a las particularidades que presentó la cuestión.

ES COPIA

MARIA SOLEDAD JORGE
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

USO OFICIAL

El Dr. Francisco de las Carreras dijo:

En primer lugar, doy por reproducidos los considerandos 1.- y 2.- de mis distinguidos colegas.

3.- Sentado ello, se advierte que la cuestión a resolver consiste en determinar si se encuentran reunidos los requisitos necesarios para considerar que la operación de compra venta se encuentra exenta —o no— de ser informada a la autoridad administrativa y sometida al control previo del art. 8° de la ley 25.156.

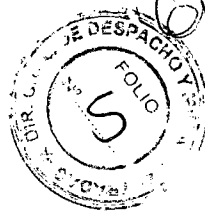
4.- Cabe recordar que el art. 8° de la ley 25.156 establece que los actos de concentración económica deberán ser notificados a la autoridad administrativa correspondiente cuando la suma del volumen del negocio total del conjunto de las empresas afectadas supere en el país la suma de \$200.000.000.

Sin embargo, el art. 10, inc. c), de la ley 25.156 prevé que se encuentran exentas de la notificación obligatoria *“las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina”*.

5.- Las partes invocaron a su favor que la operación de compra venta se encuentra exenta dado que la empresa adquirente no posee otros activos o acciones en el país (cfr. solicitud de opinión consultiva de fs. 2/8).

Por su parte, la resolución de la Secretaría de Comercio Interior n° 106 del 27.7.11 (cfr. fs. 548/558) consideró que no se verificaba en el caso la hipótesis de la exención del art. 10, inc. c), de la ley 25.156, dado que una de las empresas (Hannover), que pertenece al grupo económico de la compradora, realiza habitualmente actividades de reaseguro sobre eventuales siniestros a producirse en el país, por lo cual constituye una actividad a la que puede atribuirse claramente un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originando la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica (cfr. punto 35 de fs. 558).

Poder Judicial de la Nación



MA. ALEJANDRA
SECRETARIA

6.- En ese estado, debe recordarse que la primera regla para interpretar las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, de manera tal que debe estarse a lo estipulado literalmente en ella (cfr. esta Sala, causa 4651/10 del 20.10.11).

En el mismo sentido, *“la exégesis de las normas legales debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu, con el propósito de efectuar una interpretación que no resulte ajena a lo que la ley establece (Fallos: 314:1422), desde que la primera fuente de hermenéutica de la ley es su letra (Fallos: 314:458). Si la ley emplea determinados términos, la regla de interpretación más segura es la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador”* (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa R.54.XXXI, “Rossi Sarubbi, Maximiliano José c/ Cielos del Sur S.A. y otros s/ daños y perjuicios” del 16.4.98).

Desde esta perspectiva, la exención de la obligación establecida en el art. 8° de la ley 25.156 se produce cuando el adquirente posee *“activos o acciones de otras empresas en la Argentina”*.

De acuerdo a lo establecido en la ley de Sociedades n° 19.550 (art. 63), en el balance de una sociedad son considerados “activos” tanto el dinero en efectivo en caja y bancos, moneda extranjera, créditos y bienes de cambio (incluyendo materias primas, productos en proceso de elaboración y mercaderías de reventa, entre otros); como así también los títulos de deuda pública, acciones, debentures, bienes de uso, bienes inmateriales y los gastos y cargas que se devenguen en el futuro.

En las actuaciones administrativas que se tienen a la vista no se produjo ninguna prueba que demuestre que la empresa adquirente y eventualmente el grupo económico que integra carezcan de esos “activos” en nuestro país, como para decidir si le corresponde acceder a la exención de la obligación legal de informar la operación de compra venta de la ley 25.156.

MARIA SOLEDAD JORGE
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA

USO OFICIAL

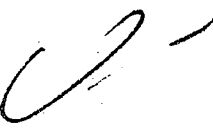
En rigor de verdad, la Secretaría de Comercio Interior ponderó que ciertas empresas (que integran el grupo económico) prestan servicios dentro de nuestro país, sin analizar con el rigor necesario cual es el grado de participación que tienen las empresas entre sí y cuales son —de manera concreta y fehaciente— esos activos que impiden conceder la exención solicitada por las partes.

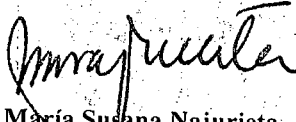
De esta manera, debe revocarse la resolución de fs. 548/558 y disponer que en sede administrativa se produzcan las pruebas pertinentes a los efectos de que la autoridad competente cuente con suficientes elementos para resolver de manera expresa sobre la pertinencia de la exención invocada por las partes.

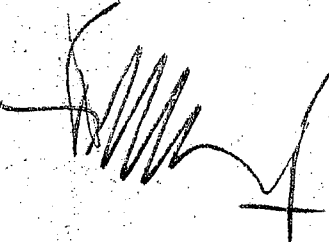
Por todo lo hasta aquí expuesto, el Tribunal —por mayoría de votos— **RESUELVE:** desestimar el recurso directo de apelación interpuesto a fs. 560/578.

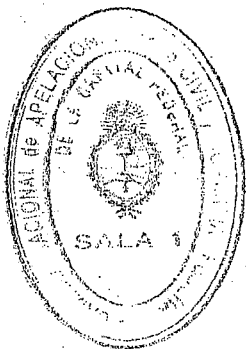
Las costas se distribuyen en el orden causado atendiendo a las particularidades que presentó la cuestión.

Regístrese, notifíquese y devuélvase mediante oficio de estilo.

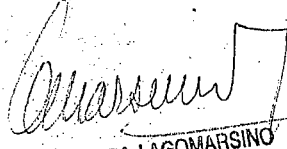

Martín Diego Farrell


María Susana Najurieta


Francisco de las Carreras
(en disidencia)



SALA CIVIL Y COMERCIAL N°1
Registrado al N° 748 T° 2013
DEL LIBRO DE SENTENCIA.


MA. ALEJANDRA LAGOMARSINO
SECRETARIA